

¿Quién se queda con el crudo?

La batalla por las reservas venezolanas no es por escasez, sino por control monetario y geopolítico

Según analistas, la estrategia de Estados Unidos para intervenir en la cadena productiva de hidrocarburos de Venezuela responde, en lo inmediato y a mediano plazo, más a una lógica de influencia global o geopolítica que a necesidades concretas del mercado energético.

Pocas horas después del operativo militar desplegado en territorio venezolano que incluyó la aprehensión del presidente Nicolás Maduro—, Donald Trump reiteró que uno de sus fines centrales en la región era tomar el control de las instalaciones petroleras, con el propósito de que corporaciones estadounidenses asumieran su reactivación.

Aunque amplios sectores perciben que Washington depende urgentemente del crudo venezolano, altos cargos del gobierno han dejado entrever que, si bien se espera un retorno financiero para las firmas del sector, la operación obedece más a una agenda ideológica que a una necesidad económica apremiante.

En una entrevista con Fox News, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que uno de los propósitos fundamentales del operativo en Caracas era restablecer la influencia estadounidense en América Latina, en particular para limitar los acuerdos energéticos que países de la zona mantienen con actores como China, Rusia e Irán.

«Esto es el hemisferio occidental. Aquí es donde está nuestro entorno, y no vamos a tolerar que se convierta en una plataforma de acción para quienes consideramos adversarios estratégicos», sostuvo el funcionario.

Los expertos coinciden en que la intención de apoderarse de las instalaciones energéticas responde a un plan de largo aliento, sobre todo porque el país andino carece, en la actualidad, de la capacidad técnica y logística para explotar sus vastos yacimientos de forma inmediata.

Con unas reservas calculadas en 300.000 millones de barriles —el 17 % del total mundial—, Venezuela logra extraer apenas unos 900.000 barriles diarios, muy por debajo de los más de dos millones que alcanzaba a comienzos de los años 2000.

Alonso Romero, académico especializado en mercados energéticos y egresado de la Universidad de Edimburgo, opina que el impulso por desestabilizar al gobierno venezolano busca asegurar la primacía del dólar en las transacciones petroleras, frente a la creciente influencia de naciones como China.

Pekín ha jugado un rol determinante al ofrecer una salida comercial al crudo venezolano pese a las sanciones. Según Reuters, en noviembre del 2025, de los 921.000 barriles exportados diariamente, el 80 % tuvo como destino puertos chinos.

«Se observa una dinámica regional en la que naciones como Brasil y Argentina ya están utilizando el yuan en sus intercambios. Está emergiendo un sistema financiero alternativo. Y lo que EE.UU. no puede permitir es que las mayores reservas mundiales de petróleo operen fuera del dólar —eso representaría una amenaza sistémica para su hegemonía monetaria», explica Romero.

En la misma línea se pronuncia María del Rosío Vargas, doctora en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien considera que la acción directa en Venezuela busca impedir que el bloque BRICS profundice su integración energética con el país, especialmente mediante el uso de sus propias divisas.

Para la especialista, el interés central de Washington radica en ejercer presión sobre los precios globales del petróleo como herramienta antiinflacionaria.

«Trump entiende el crudo como una palanca geopolítica. Controlar el suministro le permitiría estabilizar los precios internos, apuntalar su discurso de éxito económico y, de paso, generar ingresos que ayuden a aliviar el déficit fiscal y la deuda—sobre todo después de los aranceles masivos que ha impuesto», señala.

No obstante, Vargas subraya que el enfoque energético estadounidense se entrelaza profundamente con su doctrina de seguridad nacional, lo que sugiere una continuidad en la política, más allá del partido que ocupe la Casa Blanca o el Congreso.

De hecho, menciona que en otros contextos regionales —como las negociaciones del T-MEC con México— el tema energético se ha vuelto un eje inamovible, siempre subordinado a los intereses estratégicos de Washington.

Los analistas recalcan que, en lo inmediato, será prácticamente imposible que EE.UU. aproveche en su totalidad el potencial petrolero venezolano, tanto por la obsolescencia de su infraestructura como por la probabilidad de que se opte por conservar esos recursos para etapas posteriores.

Esto se explica, en parte, porque las reservas estadounidenses —en particular las de la Cuenca Pérmita— aún están en fase de expansión, pero se prevé que su producción alcance su techo entre el 2030 y 2036, momento en que podría iniciarse un declive sostenido.

En ese contexto, será determinante observar el nivel de capital que las empresas norteamericanas estén dispuestas a destinar a Venezuela: desde la exploración y perforación hasta la refinación. Esto no solo abarataría costos operativos, sino que permitiría aprovechar plantas ya diseñadas para procesar crudo pesado —una ventaja clave frente al petróleo ligero obtenido mediante fracking.

«Permanecer en Venezuela le daría a las grandes petroleras una prolongación estratégica en el negocio. Hoy el fracking es caro y con márgenes ajustados; allá, con tal riqueza geológica, podrían operar con menores costos, mayor control sobre la cadena y una rentabilidad mucho más robusta», sostiene Vargas.

Romero calcula que no será antes de dos años que se observe un repunte significativo en la producción —siempre y cuando se concrete una inversión estimada entre 50.000 y 60.000 millones de dólares—, lo que podría elevar la extracción por encima de los dos millones de barriles diarios.

En ese hipotético escenario, los precios globales no registrarían grandes fluctuaciones, pues la OPEP podría compensar el aumento con ajustes en su propia oferta.

Sin embargo, el experto anticipa que será recién entre el 2030 y 2032 cuando Venezuela podría alcanzar su capacidad máxima —hasta cinco millones de barriles diarios—, momento en que sí tendría peso decisivo en los mercados internacionales.

Romero advierte que, si Caracas opta por abrir su industria a capitales externos sin salvaguardas, los beneficios irían mayoritariamente a manos privadas, replicando modelos como el chileno de los años ochenta, donde los recursos estratégicos se orientaron casi exclusivamente a la exportación.

«Sería un esquema muy similar al de Chile bajo la dictadura: extracción intensiva, rentas hacia el exterior, y una administración local supeditada a intereses foráneos. En ese contexto, ¿quién defiende los derechos del pueblo venezolano?», cuestiona.

Vargas, por su parte, considera prematuro sacar conclusiones definitivas, y sugiere aguardar las rondas de diálogo entre autoridades venezolanas y corporaciones estadounidenses —cuya participación, según Trump, ya está avanzada.

Al igual que Romero, prevé que, en una década, con el control efectivo de los yacimientos, Washington podría ejercer una influencia decisiva en los mercados energéticos. No obstante, subraya que, mientras Delcy Rodríguez permanezca al frente del gobierno interino, nada está decidido.

«Lo más probable es que se ofrezcan concesiones a la inversión foránea... pero esto es, ante todo, una disputa de poder. Y no hay que subestimar el tejido social venezolano: su historia reciente muestra una profunda resistencia a la pérdida de autonomía», concluye la investigadora.